

» Colombia hacia el posconflicto: desafíos de la transición

Bogotá » 06 » 2016

LA VOLUNTAD DE PONER FIN AL CONFLICTO POR LA VÍA POLÍTICA

Después de varios intentos fallidos o de resultados parciales, Colombia acaricia la oportunidad de poner fin al conflicto armado a través de la negociación entre el Gobierno Nacional con los grupos insurgentes. Llegar a esta coyuntura, tras cinco décadas de confrontación, es producto de la convergencia de diversos hechos, constitutivos de una realidad que se impone como marco racional de las decisiones del Estado y de las guerrillas.

El primero de esos hechos es la inviabilidad militar del proyecto revolucionario. La toma del poder por la vía de las armas, o la imposición de estos grupos como Estado sobre territorios de la extensa geografía nacional -otrora objetivos de esas organizaciones-, son irreversiblemente inalcanzables. Durante 18 años de un proceso continuo de profesionalización y dotación de las Fuerzas Militares, apoyado por el plan de asistencia de los Estados Unidos, conocido como Plan Colombia, se cerraron progresivamente los horizontes militares de los grupos insurgentes, que entraron en franco declive. El abatimiento de los principales comandantes militares y políticos de las FARC fue el preámbulo de la negociación con esta guerrilla, la más importante en tamaño.

El segundo factor que obra en beneficio del fin del conflicto en Colombia es la falta de respaldos internacionales a los movimientos guerrilleros. Si hasta hace apenas unos años esas fuerzas encontraban resonancia y abierta cooperación de los países alineados con el proyecto chavista y su expansión en América Latina, en la actualidad su fracaso ha significado también la

pérdida de ese sustento. El cerrojo definitivo lo fija el contexto hemisférico que configura la recomposición de las relaciones de los Estados Unidos y Cuba y, con este, el fin de la Guerra Fría en el continente.

Un tercer aspecto de la realidad que concurre para la terminación del conflicto por la vía negociada es el impacto del narcotráfico en la causa revolucionaria y el grave deterioro que produjo en la disciplina y estructura insurgente. El sostenimiento del aparato militar y político de las guerrillas con recursos de narcotráfico, sumado a la práctica de secuestros como medio de financiamiento, contrario a lo que suele pensarse, resultó ser letal para sus propios fines y un factor de seria amenaza a su unidad.

A este panorama de factores disuasivos se sumó una serie de hechos políticos, de carácter persuasivo, que completó la masa crítica necesaria para ubicar al país ante el inminente fin del conflicto. La disposición a definir y tramitar una agenda basada en las reivindicaciones insurgentes y la apertura de los espacios para la participación política de quienes dejen las armas han sido determinantes en la construcción de la voluntad de negociación, tanto de las FARC como del ELN.

LA NUEVA ARENA POLÍTICA

Así las cosas, para las guerrillas el concepto estratégico de la negociación es sustituir los medios sin renunciar a los fines. Preservan la idea socialista y su intención de acceso al poder, pero ya no en el campo militar, sino en la arena de la política. Y aunque no tienen garantías de éxito, al menos sí mayor oportunidad y capacidad de competir por el poder, en especial en aquellas áreas del país en las que, pese a la existencia de recursos estratégicos, debido a la poca población y por ende de votos el sistema político no ha sido capaz de volcarse. Su tesis es que la derrota militar insurgente no significa el triunfo de las instituciones en el territorio y menos aún en la población. Su apuesta es instaurar la revolución a través de la política. Para eso le apostarán al fracaso del Estado y a la crisis del sistema político, así como a la deslegitimación y polarización de los poderes estamentales.

Entre tanto, para el Gobierno Nacional el proceso, que significa trascender de la seguridad a la paz, es la oportunidad de incorporar los territorios y pobladores de las zonas "periféricas" en los circuitos de la gobernabilidad y el desarrollo, creando las condiciones para aprovechar las ventajas competitivas que le ofrecen al país para las próximas décadas. En efecto, siendo Colombia un país de ciudades, en el que más del ochenta y cinco por ciento de la población habita en los grandes centros urbanos, su mayor potencial productivo lo ofrece su riqueza rural. Más de dos cuartas partes del territorio, con altos potenciales para el mercado, que registran un alto déficit institucional. En consecuencia, contrario a las guerrillas y los movimientos políticos que las acogerán, para el Gobierno la apuesta es a la entronización del Estado y sus instituciones en el territorio. La mejor estrategia, llevar de la mano al Estado y el mercado.



En este nuevo contexto político pesan de manera importante otras visiones y fuerzas. Por una parte, las de quienes han obtenido y podido preservar sus bienes y demás derechos pese al acecho de la violencia. Su preocupación y su objetivo es garantizar que el posconflicto no se constituya en el motivo para la trasgresión de sus intereses en nombre de la paz. Su mayor amenaza es el abuso del poder, por parte de las propias instituciones, en el prurito de conquistarla. También, sentir que este proceso pone en riesgo las conquistas obtenidas en materia de seguridad y orden público durante los últimos años. Esta perspectiva tiene una incidencia muy relevante en el respaldo ciudadano que necesita el proceso y en la actualidad explica la fuerte oposición que recibe. Tanto para el Gobierno como para los propios grupos insurgentes el desafío en esta materia es pedagógico: explicar los acuerdos en sus reales alcances y persuadir a los colombianos de los altos beneficios que tiene pactar el fin del conflicto.

“La finalización del conflicto armado, además de cerrar un largo y doloroso círculo de violencia en Colombia, con certeza permitirá desatar todas sus potencialidades y acelerar su proceso de desarrollo.”

Por otra parte, las mayores amenazas al proceso provienen de actores y círculos de poder que han acumulado privilegios políticos y económicos respaldados en la violencia. Se trata en este caso de verdaderas élites regionales, unas de izquierda y otras de derecha, que construyeron y mantienen sus emporios de dominación territorial a través de la intimidación de las armas. En este ámbito se sitúan los mayores enemigos de la solución política al conflicto armado. Aquí está el germen de las disidencias -comunes en procesos de esta naturaleza-. También, los más férreos enemigos de cualquier expresión de Estado en los territorios, incluida la actividad empresarial. El reto que estas fuerzas representan para el Estado, además de su desmantelamiento, es contener cualquier tipo de acción de violencia selectiva como instrumento de incidencia política.

AMBIVALENCIAS

La finalización del conflicto armado, además de cerrar un largo y doloroso círculo de violencia en Colombia, con certeza permitirá desatar todas sus potencialidades y acelerar su proceso de desarrollo. Es bueno tener en cuenta que, aún a pesar de la confrontación, el país ha crecido de manera consistente en los últimos cincuenta años, ha podido profundizar su democracia y mantiene uno de los sistemas políticos más estables de América Latina. La paz significa un pie en el acelerador de estas tendencias.

No obstante, la transición del posconflicto implicará atravesar un camino sinuoso y lleno de desafíos.

En primer lugar, la materialización de los acuerdos sustantivos. En este caso, en especial los relativos a desarrollo rural, solución al problema de las drogas ilícitas, la participación política y el resarcimiento a las víctimas. Administrar este tema no será un problema menor y con certeza conllevará controversias y tensiones asociadas a sus alcances y sus efectos. Puede anticiparse que mientras en una orilla el cumplimiento de tales acuerdos se evaluará bajo una óptica de medios, desde la otra se hará bajo un criterio de resultados. Lo que para unos será cumplimiento, no en pocos los casos, para los otros, serán lo contrario.

En segundo término, se requiere gestionar el cumplimiento de los asuntos de procedimiento asociados al fin del conflicto, entre ellos el desmantelamiento de las estructuras militares insurgentes y la inserción de sus miembros a la vida civil. En la negociación se habrá de materializar el cese bilateral al fuego, la dejación de armas y, junto con la determinación de la suerte judicial de los excombatientes, la definición de sus opciones socio productivas y de participación política.

Ambos ámbitos, el cumplimiento de lo sustantivo y de lo procedimental, están, en la práctica y más allá del tenor literal de los acuerdos, condicionados el uno al otro y gobernados en su ritmo y desarrollo por la desconfianza en la palabra de la contraparte. Es decir, durante el posconflicto se tendrá que construir, *pari y passu*, la confianza.

Este asunto es además medular, puesto que en la convergencia de estas dos agendas se establecen los saldos finales de poder alcanzados por la insurgencia en la negociación. En su desarrollo práctico

ambas confluyen en el ejercicio de poder territorial. Su aplicación es el preámbulo de la definición de un nuevo régimen político administrativo sobre el territorio -lo que explica la presión por una asamblea constituyente-, que es el factor subyacente a esta negociación. Es previsible que aquí ocurran las mayores crisis del proceso.

En tercer lugar, la gestión del posconflicto implicará administrar las expectativas ciudadanas, pues el desencantamiento precederá a las ilusiones de cambios positivos favorables, sobre todo en materia de seguridad ciudadana y desarrollo social. No será fácil explicar las ambivalencias propias de procesos de esta naturaleza, en los que hay continuamente avances y retrocesos, al principio más de los segundos que de los primeros. Y esto máxime cuando unos y otros constituirán

la munición de una competencia política que en lo nacional y en las regiones estará signada por la polarización.

Un cuarto factor que será crítico en el posconflicto es la contención a nuevas formas de violencia, bien como resultado de eventuales disidencias de las guerrillas, bien por su mutación a nuevas formas de crimen organizado, o bien por la dispersión y desviación de miembros de sus filas a formas de delincuencia común. Las economías criminales de narcotráfico y minería ilegal, activas en el país, son un factor que agudiza este riesgo.

EMPRESARIOS Y POSCONFLICTO

El fin del conflicto armado colombiano creará una nueva atmósfera para los negocios. De hecho, la reducción efectiva de la violencia durante los últimos años ha facilitado el flujo de las inversiones y ha permitido la realización de apuestas empresariales que años atrás eran impensables.

La profusa, variada y rica diversidad ambiental del país, en un nuevo contexto de orden público, permitirá el desarrollo de las vocaciones de su ruralidad. La producción de alimentos, la agricultura y ganadería tecnificadas, el turismo y hotelería, la producción de energía, la minería, por mencionar algunos, son sectores de la economía con gran espacio de crecimiento. Y a ello se suma el gasto público y la inversión privada en la modernización de la infraestructura de transportes, logística y servicios, que permitirá cerrar en parte la brecha que el país tiene en esa materia.

Pero el sector privado no estará exento de riesgos durante esta transición.

En un ambiente altamente politizado y de expectativas exacerbadas de los ciudadanos sobre los beneficios inmediatos y directos del posconflicto el sector privado sufrirá mayor presión. Y esto con mayor intensidad en los sectores extractivos de la economía, como las industrias petrolera, minera, agroindustrial, eléctrica y de infraestructura. En la medida en que las respuestas institucionales a las demandas poblacionales sean deficitarias y demoradas, se incrementará el reclamo por beneficios empresariales, bien para la inclusión en la cadena de valor, o bien exigiendo mayores recursos de inversión social. El extremo de esta dinámica podría ser el incremento de paros y bloqueos, en detrimento de la continuidad operacional, al igual que los señalamientos por malas prácticas sociales, ambientales o de derechos humanos, que expondrán el patrimonio de reputación de las empresas.

En el ámbito de la seguridad, es evidente la reducción de las hostilidades asociadas al conflicto armado, tales como los secuestros, las extorsiones o la destrucción de infraestructura. En términos generales las cifras de criminalidad muestran un franco descenso, prácticamente en todos los delitos, tanto en las ciudades como en el campo. No obstante, lo que es necesario prever y gestionar es la posibilidad de un deterioro de la seguridad ciudadana como producto de dos factores: por una parte, el desmantelamiento de las estructuras insurgentes, y por la otra la mayor exposición de personas y bienes empresariales en entornos antes vedados por el conflicto armado.

Frente a estas y otras presiones, directas o indirectas, pero todas influyentes, será necesario que las empresas se preparen. La definición de sus estrategias, tanto para capturar las oportunidades, como para gestionar los riesgos, implicará fortalecer sus capacidades para

relacionarse y para comunicarse, en un sistema social y político de creciente complejidad y en el cual necesitarán como nunca antes legitimar su actuación. Derribado el telón del conflicto, será más exigente el escenario para la obtención y preservación de la "licencia social".

Las buenas prácticas, resultado del acogimiento de estándares socio ambientales, será una condición necesaria, pero insuficiente. El sector privado deberá participar en la inclusión de grupos poblacionales en sus cadenas de valor, como por ejemplo mediante el empleo de excombatientes o de víctimas del conflicto. Pero también eso será solo una parte de la solución.

Trascender del fin del conflicto a la construcción de una paz estable y duradera implicará un rol más activo y audaz de los empresarios. Están convocados por las circunstancias a crear más empresas, promover la *asociatividad* productiva, adoptar modelos inclusivos, apoyar emprendimientos, transferir conocimiento y capacidades empresariales, estimular la innovación, y a apoyar el fortalecimiento de las instituciones del Estado, todo esto con prioridad en las zonas del país más afectadas por el conflicto armado. Un buen empresario sabe que hoy el mejor negocio es invertir y aportar a la paz.



Ernesto Borda Medina Desde hace más de veinte años ha analizado conflictos armados y ha participado activamente en procesos de negociación de paz y postconflicto, tanto en Colombia como a nivel internacional. Ha asesorado a varios gobiernos de Colombia en la formulación y desarrollo de procesos de negociación de paz. Abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, es experto en ciencias políticas y derechos humanos, áreas en las que ha ejercido responsabilidades públicas, consultoría internacional y docencia universitaria. Fue asesor del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, Director del Instituto de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Director de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de Colombia. Desde hace 16 años está al frente TRUST, firma líder de consultoría en el análisis, formulación y acompañamiento a la ejecución de estrategias de gestión de riesgos asociados a factores de entorno sociopolítico y de seguridad en Colombia y América Latina.

eborda@trust.com.co

d+i desarrollando ideas

LLORENTE & CUENCA

Desarrollando Ideas es el Centro de Liderazgo a través del Conocimiento de LLORENTE & CUENCA.

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.

Desarrollando Ideas es una combinación global de relación e intercambio de conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la sociedad y tendencias de comunicación, desde un posicionamiento independiente.

Porque la realidad no es blanca o negra existe

Desarrollando Ideas.

www.desarrollando-ideas.com

www.revista-uno.com

